

# Octubre del 68: las raíces de la violencia política

Sergio Aguayo Quezada, *1968, los archivos de la violencia*, México, Grijalbo/Reforma, 1998.

## Saúl Velasco Cruz

**H**an sido muchos los escritos que han intentado reconstruir sistemáticamente y explicar con objetividad los acontecimientos capitales del 2 de octubre de 1968 en la Plaza de las Tres Culturas. Todos ellos, en diferentes grados, han buscado contribuir a desvanecer el misterio que envuelve esa fecha trágica ofreciendo pistas, sugiriendo diversas hipótesis, pero aún permanecen puntos cruciales sin resolver para alcanzar una satisfactoria explicación de los hechos. Treinta años después de aquel fatal acontecimiento, las descripciones fáciles han quedado descartadas definitivamente. No hay más espacio para las conjeturas y con la distancia que imponen los años se hace necesaria una explicación histórica de gran rigor.

El libro de Sergio Aguayo Quezada, *1968, Los archivos de la violencia*, que en estas líneas presentamos, promete satisfacer

esa necesidad de rigurosa exploración histórica sobre el 68 mexicano. Este reconocido investigador y defensor de los derechos humanos se da a la tarea de explorar en los archivos gubernamentales disponibles de los sexenios que van de 1958 a 1970. Además, el autor revisa de manera complementaria algunas importantes fuentes en el extranjero entre las que destacan: los archivos nacionales de Washington, la Biblioteca Lyndon Baines Johnson de Austin, los archivos del Comité Olímpico Internacional (COI) en Lausana, Suiza, y los "Papeles de Avery Brundage" (presidente del COI) en la Universidad de Champaign-Urbana, Illinois.

El hallazgo preliminar que registra la obra es que: en "relación con el movimiento estudiantil todos los archivos mexicanos fueron mutilados deliberadamente, aunque de manera desigual". Entre los archivos revisados por el autor, "la colección más completa es el Archivo de la Secretaría de Relaciones Exteriores [y] el más agredido es el del Departamento del Distrito Federal"; el Archivo General de la Nación contiene documentación de diversas dependencias oficiales, entre la que destaca la de la Secretaría de Gobernación que, no obstante, contiene una base muy "desigual".

Hay archivos que el autor no pudo conocer. Por ejemplo, el de la Dirección Federal de Seguridad, el de la Secretaría de la Defensa Nacional y el de la Presidencia de

---

la República. Ciertamente, pasarán muchos años para que algunos de ellos puedan estar a la disposición de los historiadores.

La obra recoge también importante información testimonial vertida por protagonistas que, a decir del autor, nunca habían sido entrevistados; funcionarios mexicanos de nivel medio y diplomáticos acreditados en México aquel año. La identidad de los entrevistados ha sido protegida por evidentes razones.

La obra de Aguayo Quezada posee un carácter pionero. Ella ha logrado examinar una importante veta histórica. Sin embargo, hay que decir que esta obra apenas si desbroza la vía histórica. Primero por las limitaciones que aún presenta el trabajo de archivo, tanto por el tratamiento que se les ha dado a las fuentes disponibles, por los vacíos que dejan las mutilaciones que han sufrido los archivos consultados así como por la prohibición que aún se mantiene sobre algunos de ellos. Una consideración adicional en este mismo sentido es que "los archivos no hablan solos, por tanto corresponde al historiador llegar [a ellos] con un marco explicativo general y con algunas preguntas que orienten la recuperación y procesamiento de la documentación" (p. 17).

Otro tanto ocurre con las fuentes testimoniales. Los entrevistados "no mentían al entrevistador, decían la realidad que habían ido construyendo y de la cual eran generalmente

omitidos los aspectos o detalles incómodos" (p. 15). Pero ante la imposibilidad de verificar muchas de las explicaciones y pistas recogidas en esas conversaciones, [el autor optó por tomar] "una gran parte de las entrevistas como guía para ordenar la información aparecida" (p. 16).

En cualquier caso, estas limitaciones con las que tropieza la obra, no disminuyen el mérito que ella tiene. En efecto, su virtud radica, por una parte, en su carácter pionero al buscar el rigor histórico en la explicación de los hechos y, por otra, en la construcción de síntesis explicativas que pueden ser sometidas a comprobaciones futuras.

La obra está compuesta por cuatro apartados que sucesivamente interpretan los acontecimientos de Tlatlelolco "como parte de una historia, como otro eslabón en la larga, y poco conocida, evolución de la violencia política mexicana" (p. 18). Así pues, la violencia política se convierte en el punto de entrada para iniciar la investigación y, asimismo, su evolución histórica se transforma en el hilo conductor que alimenta de principio a fin toda la obra que ahora reseñamos.

En este sentido, el 68 mexicano se presenta como un evento que posee antecedentes y una línea de continuidad, cuyos orígenes y explicación no se encuentran solamente en la trama única y exclusiva que se gesta, se presenta y se recrea en el

movimiento estudiantil. Por el contrario, en su calidad de suceso histórico, recoge una trayectoria que enlaza y une dos grandes líneas a saber. Por una parte, está la que describe la lógica del sistema político mexicano, sus peculiaridades que lo distinguen, así como sus formas de tratar y enfrentar las explosiones de conflicto social y, por otra, la herencia de una oposición larvada en distintos frentes cuya síntesis asombrosamente se logra en el movimiento estudiantil, con epicentro en la metrópoli capitalina.

El gobierno de México en los años sesenta se caracteriza por tener un estilo de ejercer el poder "sin obstáculos o sin interferencias". Posee una gran "legitimidad" que le viene de los logros obtenidos en las décadas previas. Además, guarda entre los países del área un prestigio muy sólido en razón del mantenimiento de la "tranquilidad política". Pero todo esto tiene una explicación que gira en la forma en que el autoritarismo presidencial opera. El México de los años sesenta no es una democracia, afirma Aguayo Quezada, por lo cual, cualquier expresión minoritaria de insatisfacción con el régimen político, o se alineaba asumiendo las reglas del juego, o bien se exponía a diversas formas de coerción y castigo. El movimiento estudiantil de 1968 en su condición de movimiento opositor que desafió las reglas y las costumbres instituidas por el

sistema, se expuso a los efectos de "la violencia legítima" ejercida por el Estado, en una de sus formas más brutales de todos los tiempos.

Entre 1958 y 1970 "la maquinaria que tenía el gobierno federal para aplastar opositores era poderosa y eficaz". En estos años, Gustavo Díaz Ordaz, primero como secretario de Gobernación y luego como presidente, "tuvo una influencia decisiva en la forma como se utilizó la violencia política".

La personalidad de este hombre es un elemento clave en el entendimiento del manejo de la violencia política aplicada a la oposición durante estos años. Díaz Ordaz es un personaje de obsesiones múltiples que posee una personalidad paranoica. Sus escritos públicos, sus discursos y sus memorias íntimas sobre el movimiento estudiantil y, en general, sobre todo acto de inquietud social no dejan lugar a dudas de que era alguien que "veía conspiraciones por todas partes".

Un hallazgo muy importante hecho en esta obra es que todas las dependencias encargadas de observar el comportamiento de la oposición informaban directamente al presidente. Además, entre ellas no hay evidencias que demuestren que compartieran los resultados de sus investigaciones. Por tanto, todo parece indicar que el único que podría tener un cuadro completo de los acontecimientos era el presidente y nadie más.

---

Otro descubrimiento no menos importante registrado en la obra es que la Secretaría de Relaciones Exteriores desempeñó un papel muy activo y dedicado en la observación y cuidado de la opinión internacional que se fue formando; primero en relación con la evolución que tomaba el movimiento estudiantil antes del 2 de octubre y, luego, en la formación de la opinión que sobrevendría después de la masacre. En ambas etapas, la actividad de esta Secretaría es de gran intensidad.

Por ejemplo, el autor desprende importantes descubrimientos en relación con el papel que juegan los gobiernos de países claves como Cuba, la Unión Soviética y Estados Unidos. Para entonces, la guerra fría está en pleno revuelo y los temores de la amenaza comunista no dejan de inquietar al presidente mexicano. De ahí que la atención sobre Cuba y la Unión Soviética haya sido primordial para la Secretaría de Relaciones Exteriores. Los datos de los archivos demuestran, sin embargo, que estos países cuidaron sus relaciones con México, controlando al máximo la información sobre los acontecimientos difundida en su interior.

Volviendo a la línea central de exploración, el autor intenta encontrar una lógica de la violencia política en México. Se trata de descifrar una especie de patrón que ayude a comprender con mayor claridad cuándo y por

qué se ejerce la coacción institucional y cuál es su estilo característico. Por ejemplo, cómo entender los hechos violentos de Chilpancingo, en el estado de Guerrero, o los que se suscitaron en Morelia, Michoacán, durante el movimiento estudiantil, o lo que ocurrió en torno al movimiento *navista* en San Luis Potosí. Todos estos casos podrían tener, al examinarlos en profundidad, gran parecido con lo ocurrido al movimiento estudiantil capitalino. En efecto, el caso que más semejanzas guarda con el movimiento estudiantil del 68, es el movimiento *navista* de San Luis Potosí. En ambos, el factor desencadenante de la violencia y el enfrentamiento es provocado por francotiradores anónimos.

Ahora bien, el movimiento estudiantil en cuanto movimiento opositor recoge una amplia gama de influencias. Desde las que van de las posturas moderadas hasta las más radicales y que ven en las prácticas violentas de expresión, formas válidas para la lucha social. Pero el movimiento estudiantil, en general, estaría dominado fundamentalmente por una postura moderada. Las fuentes consultadas le permiten al autor demostrar cómo la dirección del movimiento, en los momentos más próximos al 2 de octubre, habían aceptado la negociación propuesta por el gobierno, salvo que insistían en celebrarla, a modo de diálogo público, en la plaza de la Constitución, postura que, como sabemos, nunca fue aceptada.

Sin embargo, la evolución de los acontecimientos provocaría la emergencia de posiciones diversas que reaccionaron ante la violencia de la fuerza pública de modos distintos.

En aquella tarde en la plaza de las Tres Culturas, aún no se logra saber con precisión cuántos estudiantes dispararon en el momento del enfrentamiento (p. 247). El autor no le resta a este dato la importancia que tiene en la investigación, pero lo cierto es que está demostrado que el poder de fuego que podrían haber tenido los estudiantes era mínimo e insignificante comparado con el poder que demostraron los francotiradores protegidos por la distancia y la altura de los edificios.

De todas formas, la labor de reconstrucción histórica no es sencilla. La opinión oficial ocultó toda información sobre los francotiradores. Las pistas que dan los documentos archivados y las declaraciones de importantes mandos militares de la época no descubren ni detallan de forma clara la identidad de los francotiradores. Las declaraciones de los militares, en una evidente maniobra de desinformación, sugieren que "el ejército cayó en una trampa". En suma, las pistas de investigación, desempolvadas por la investigación documental, parecen entonces sugerir que el gobierno usó en la agresión a un grupo paramilitar creado y protegido por el Departamento del Distrito Federal. El plan, en efecto, resultó "perfecto" puesto

que los militares remitieron a los francotiradores que detuvieron al dominar la situación, a la autoridad civil de la jurisdicción, es decir, al Departamento del Distrito Federal y, una vez ahí, bajo la protección de sus creadores, los paramilitares se perdieron en el más profundo de los anonimatos. Acción que favoreció el sistema mismo al borrar todas las evidencias del crimen cometido.

Pero hay una pregunta que sobrevive y que trasciende el esfuerzo contenido en la obra de Aguayo Quezada: ¿quién o quiénes planearon la masacre? Es claro que detrás de esa pregunta permanece un desafío que no se satisface con la explicación oficial sostenida sobre la posición de Díaz Ordaz asumiendo íntegramente la responsabilidad de los hechos. La responsabilidad del presidente no disminuye ni se abulta por el hecho de que la haya reconocido sin reservas, pero el acto provocó un efecto envolvente que ocultó la pedacería imprescindible para rematar el cuadro que podría ofrecer una explicación más completa de los hechos.

Sin duda, el trabajo de Aguayo Quezada, que combina el rigor científico del especialista con el manejo de una prosa ágil y bien cuidada, es una contribución oportuna cuya revisión se hace necesaria para avanzar en la interpretación de un hecho histórico en el que "difícilmente hay un punto final" (p. 307).